

N/REF: 0062/2021

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

El proyecto tiene por objeto crear la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del INGESA, así como regular el proceso correspondiente, que posibilite la acreditación de la formación sanitaria continuada de los profesionales sanitarios que presten servicios en las instituciones sanitarias del ámbito del INGESA, dictándose de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que exige a las Administraciones públicas, con el fin de garantizar la calidad en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, establecer criterios comunes para ordenar las actividades de formación continuada.

En lo que a la materia de protección de datos personales se refiere, la norma a la que debe ajustarse el proyecto de Orden sometido a consulta es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD en lo sucesivo) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD en lo sucesivo).

I

El primer aspecto que debe analizarse es el relativo al ámbito subjetivo y el ámbito material de aplicación del RGPD y de la LOPDGDD aplicado al tratamiento de datos personales derivado de la aprobación y ejecución del proyecto de la orden sometida a informe.

Conviene indicar que el RGPD extiende su protección, tal y como establece su artículo 1.2, a los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales, definidos

éstos en su artículo 4.1 como *“toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.”*

Y en cuanto al tratamiento en sí mismo considerado, el artículo 4.2 del RGPD considera como «tratamiento»: *cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;*

II

En efecto, debe analizarse quién es el destinatario de los preceptos de la orden, y, por tanto, cuáles y de quién van a ser los datos objeto de tratamiento, a los efectos de determinar si es de aplicación la normativa de protección de datos y en caso afirmativo, en qué medida o con qué intensidad debe aplicarse.

Conviene detenerse en el Capítulo II “Procedimiento de acreditación” en tanto que prevé tratamiento de datos personales de las personas que representen o se instituyan en “proveedores de formación”.

Así en el artículo 8.5 se indica que

“Los proveedores de formación podrán ser cualquier persona física o jurídica, entidad pública o privada, con sede social en Ceuta y Melilla, que solicite en tiempo y forma una actividad acreditable cuyos destinatarios sean profesionales sanitarios del ámbito del INGESA”.

Y en cuanto al tratamiento de datos en concreto que se deriva de la regulación del procedimiento de acreditación, además de la correspondiente solicitud, en el artículo 9.1 se indica que

Los proveedores de formación presentarán las solicitudes de acreditación de actividades de formación continuada, con una antelación mínima de seis meses al inicio de la actividad formativa, utilizando

modelo de solicitud que se adjunta en los anexos I y II de esta orden acompañando la siguiente documentación:

1. Datos de la entidad proveedora: nombre, NIF, domicilio social, teléfono y correo electrónico de contacto y persona responsable de la entidad, con NIF. Las personas jurídicas deberán aportar sus Estatutos y escrituras públicas de constitución o reglas fundacionales.

En cuanto a la recogida de datos que se prevé en el Anexo I, conviene destacar que en el apartado A bajo la rúbrica DATOS DE LA ENTIDAD PROVEEDORA, se habilitan unos espacios para cumplimentar con el Nombre, NIF, domicilio completo, teléfono, correo electrónico y responsable-cargo en la entidad.

Por su parte en el apartado B bajo la rúbrica DATOS DE LA ACTIVIDAD, se habilitan unos espacios para cumplimentar con la indicación de Director/es docente responsable, persona de contacto (nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico).

En idénticos términos sucede en el Anexo II.

Por lo tanto, puede afirmarse que, de la ejecución de lo indicado en el proyecto de orden sometido a informe, va a producirse tratamiento de datos personales.

Teniendo en cuenta los preceptos y las indicaciones puestas de manifiesto, debe señalarse que el ámbito protector del RGPD también se extiende a las personas físicas que representan a las entidades, al no establecer ninguna exclusión en este sentido, pues sus datos personales deben ser tratados en las relaciones que aquellas establezcan con terceros.

En este sentido en el Informe 4/2021, se indicaba que “quedan excluidas de la aplicación de la normativa sobre datos personales las personas jurídicas, pero su ámbito protector se extiende a las personas físicas que las representan, cuyos datos personales deben ser tratados con sujeción a lo previsto en el RGPD y la LOPDGDD”.

De igual modo procede citar lo indicado en la LOPDGDD en su artículo 19 al analizar el tratamiento de los datos de personas que prestan servicios en personas jurídicas, en concreto al analizar la base jurídica que legitima el tratamiento de datos personales de datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales, y que bajo el paraguas del apartado 6.1 f) del RGPD (la presunción de la concurrencia de interés legítimo) permite el tratamiento de los datos de contacto de éstos, únicamente para localización profesional y para entablar relaciones con la persona jurídica en la que el afectado preste su servicios.

En el caso que se plantea en la Orden sometida a informe, el órgano responsable de la tramitación del procedimiento acreditación de la formación necesita, lógicamente, realizar el tratamiento de datos personales de los “proveedores de formación”, ya sean personas físicas, ya sean personas físicas-representantes de las entidades, es decir, el órgano que tramite el procedimiento necesitará tratar esos datos para entablar *relaciones* (administración pública-administrado) con la persona jurídica en cuestión.

No obstante lo anterior, es preciso señalar que esta presunción de interés legítimo de la LOPDGDD ex art. 19, no opera como base jurídica de legitimación de tratamiento en el supuesto que plantea la Orden sometida a informe pues el artículo 6.1 RGPD excluye expresamente la concurrencia del interés legítimo para los tratamientos que se realicen por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, sin embargo es objeto de cita en el presente informe pues como se ha indicado antes, la finalidad para la que se van a tratar los datos personales de los representantes de los proveedores de formación, coincide plenamente con las expresadas en el precepto, que no es otra que para estar identificados/localizados, y poder entablar los canales de comunicación necesarios en el procedimiento administrativo de la acreditación de formación y de las circunstancias que se deriven de la misma.

Por lo tanto, la primera conclusión que se obtiene es que, la recogida, de los datos personales del proveedor de formación -persona física- o del representante de la entidad proveedora de formación y su utilización durante el procedimiento se ha de considerar tratamiento de datos personales y por tanto someterse al RGPD y a la LOPDGDD.

III

El artículo 5 del RGPD recoge los “Principios relativos al tratamiento” al disponer lo siguiente:

1. Los datos personales serán:

- a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»);
- b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);

- c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);
- d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);
- e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»);
- f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).

En cuanto al principio de licitud, debe acudirse a lo indicado en el artículo 6 del RGPD y en concreto a lo dispuesto en el apartado 1 letras c) y e) a cuyo tenor:

1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;*
- e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;*

El Considerando 45 del RGPD señala que “*Cuando se realice en cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, o si es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, el tratamiento debe tener una base en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.*”

Por su parte la LOPDGDD establece en su artículo 8 bajo la denominación Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos” dispone lo siguiente:

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.”

Teniendo en cuenta lo anterior, y a los efectos de determinar si la base jurídica del tratamiento que se deriva de la aprobación y ejecución de la Orden sometida a informe es la prevista en el apartado c) o la prevista en el apartado e) del artículo 6.1 del RGPD, o lo son ambas, procede citar lo recogido en el Informe 74/2019 dónde se destacaba la necesidad de deslindar ambos conceptos, ya que no hacerlo así implicaría confundir, en la práctica totalidad de los casos de actuación de la Administración, ambas bases jurídicas, concluyendo que

Por ello, la base jurídica prevista en la letra c) del artículo 6.1. del RGPD será de aplicación en aquellos casos en los que una norma con rango de ley imponga a la Administración una obligación específica de dar, hacer o no hacer, que implique el tratamiento de datos de carácter personal, y diferente del deber jurídico genérico de la Administración de ejercer las potestades que el ordenamiento jurídico le atribuye para servir con objetividad al interés público (artículo 103 de la Constitución).

El artículo 34 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, crea la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, para armonizar el ejercicio de las funciones de las administraciones sanitarias públicas y demás instituciones y organismos en

materia de formación continuada, así como para coordinar las actuaciones que se desarrollen en dicho campo.

En concreto, entre sus funciones, se atribuyen en el apartado 4. d) las siguientes:

Las de estudio, informe y propuesta para el establecimiento de procedimientos, criterios y requisitos para la acreditación de centros y actividades de formación continuada.

Asimismo, la creación de la Comisión se fundamenta en el artículo 38 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que exige a las Administraciones públicas, con el fin de garantizar la calidad en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, y establecer criterios comunes para ordenar las actividades de formación continuada.

Respecto del ámbito de aplicación territorial de la orden sometida a informe conviene indicar que, en la disposición adicional primera, de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, se prevé expresamente que las referencias que en dicha ley se realizan a las competencias de las comunidades autónomas se entenderán hechas al Estado en relación con las Ciudades de Ceuta y Melilla, sin perjuicio de las competencias de dichas ciudades.

A lo que hay que añadir lo indicado en la Sentencia del Tribunal Constitucional 1/2011, de 14 de febrero, que determina que la competencia de la ejecución en materia de acreditación de la formación continuada es de las comunidades autónomas que han asumido la gestión sanitaria; considerando que las competencias en materia de gestión sanitaria no se han transferido a las Ciudades de Ceuta y Melilla y son ejercidas por el Ministerio de Sanidad a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (en adelante, INGESA), la acreditación de la formación continuada a los profesionales sanitarios que prestan servicio en el ámbito del INGESA, corresponde por tanto al mismo.

Teniendo en cuenta lo anterior, el tratamiento de datos personales que se deriva de la ejecución de la orden sometida a informe se encontraría legitimado en el artículo 6.1 e) del RGPD y el artículo 8.2 de la LOPDGDD, siendo la norma que atribuye la competencia de cuyo ejercicio se deriva el tratamiento, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

IV

En el Real Decreto 1142/2007, de 31 de agosto, por el que se determina la composición y funciones de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias cuando se refiere al Sistema de Información de la

acreditación determina en el artículo 4.10 que dicho sistema estará sujeto a la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

Pues bien, en el caso del proyecto sometido a informe, en el Capítulo II referido al procedimiento de acreditación, no consta referencia alguna a la normativa de protección de datos, por lo que resultaría adecuado incluir un apartado en el artículo 8 denominado Criterios Generales, referido al cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, proponiéndose el siguiente texto:

El tratamiento de los datos de carácter personal que se derive de la tramitación del procedimiento de acreditación se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en su normativa de desarrollo.

V

En cuanto al principio de transparencia, previsto en el artículo 5.1 a) del RGPD junto con el de licitud que se acaba de analizar, conviene citar lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del RGPD.

Determina el artículo 12 del RGPD en su apartado 1, lo siguiente:

1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros medios.

El artículo 12 del RGPD regula de qué modo o manera se debe proporcionar la información, es decir, qué características o cualidades debe tener la información que se ofrece a los titulares de los datos que van a ser objeto de tratamiento.

Determina el artículo 13 del RGPD en sus apartados 1 y 2, lo siguiente:

1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación:

- a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;
- b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;
- c) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento;
- d) cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del responsable o de un tercero;
- e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;
- f) en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al hecho de que se hayan prestado.

2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:

- a) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;
- b) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;
- c) cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada;
- d) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

- e) si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de que no facilitar tales datos;
- f) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

Como puede observarse, el precepto muestra el contenido material de la información. Es decir, qué elementos debe contener la información que se ofrezca al titular de los datos que van a ser objeto de tratamiento.

Por su parte, la LOPDGDD en su artículo 11, bajo la rúbrica “Transparencia e información al afectado” determina lo siguiente:

1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.
2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos:
 - a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.
 - b) La finalidad del tratamiento.
 - c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concorra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

En efecto, el artículo 11 de la LOPDGDD, establece la posibilidad de instaurar un sistema de información por capas, diferenciando una primera información básica y permitiendo la remisión a otro espacio informativo dónde el interesado que lo desee pueda consultar con más amplitud todo lo relativo al tratamiento de sus datos personales.

Pues bien, en los anexos I y II del proyecto sometido a informe, en relación con la información referida al tratamiento de datos personales, se indica lo siguiente:

Los datos de carácter personal serán tratados por el INGESA e incorporados a un fichero para la acreditación de actividades formativas de formación continuada. Por lo tanto, los datos serán tratados para poder tramitar las solicitudes de las entidades proveedoras y resolver la acreditación de las actividades formativas.

Finalidad basada en el cumplimiento de las obligaciones legales de gestión sanitaria del INGESA.

Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español. Puede ejercer sus derechos de acceso rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición al tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, mediante escrito dirigido a la siguiente dirección: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Subdirección General de Gestión Económica y Recursos Humanos, Calle Alcalá nº 56, 28071 Madrid, y podrá solicitar información al delegado de protección de datos en la dirección de correo dpdinges@inges.sanidad.gob

De acuerdo con lo expuesto, se estima que se informa sobre la finalidad del tratamiento, se identifica la base jurídica del mismo, no obstante, en este aspecto debería modificarse e indicar que **el tratamiento de datos personales está amparado en el ejercicio de poderes públicos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1 e) del RGPD y finalmente, debería incluirse el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control (artículo 13.2. d) RGPD).**

VI

En cuanto al cumplimiento de los restantes principios recogidos en el artículo 5 del RGPD, debe hacerse especial referencia, además del principio de licitud y

transparencia, al de limitación de la finalidad y de minimización de datos, recogidos en las letras b) y c), que indican que los “datos personales serán:

b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);

Como se ha indicado antes, en la tramitación del procedimiento de acreditación de las actividades concretas de formación continuada que presenten los proveedores de formación, se recogen datos personales de éstos, de sus representantes, incluso de personas de contacto que no tienen por qué coincidir con los anteriores. Se desprende que la finalidad es la tramitación del procedimiento administrativo en cuestión y en concreto la comunicación con dichos interesados.

A priori, y para cumplir dicha finalidad, es estima adecuado al principio de limitación de la finalidad y minimización de datos.

Ahora bien, en el artículo 9 del proyecto sometido a informe, entre la documentación e información que hay que aportar junto con la solicitud, en el apartado 2 Datos de la actividad, letra i) consta “participantes”.

Pues bien, se desconoce si la indicación referida a los participantes tiene que ver con su condición profesional, es decir únicamente a quién va dirigido (colectivo de profesionales), o si por el contrario hace referencia a sus nombres y apellidos, u otro identificador personal.

En este último caso, resultaría contrario al principio de minimización de datos, conocer por parte de la Comisión, la identidad de los participantes en las acciones formativas. Por lo que, salvo mejor justificación, se informa desfavorablemente este aspecto.